GRISUR

Grupo de Información
y Solidaridad Uruguay
Case postale 92
1211 Genève 4
SUISSE

Nº 59

23 de noviembre de 1976

Compte Nº 12-14847

INFORMACIONES

1. LA OIT EXIGE A LA DICTADURA LA OBSERVANCIA DE CONVENIOS. El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el viernes

19 el informe del Comité de Libertad Sindical de dicha organización sobre las denuncias contra el gobierno uruguayo por su incumplimiento de los Convenios Nº 87 (Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación) y Nº 98 (Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva). Entre otras cosas, en las recomendaciones de dicho informe se expresa "preocupación ante la falta de progreso en la situación sindical": "se llama la atención del Gobierno sobre la necesidad de permitir cuanto antes la normalización de esta situación y, a este fin, de adoptar una legislación sindical que esté en conformidad con los convenios ratificados por Uruguay"; se señala "nuevamente al Gobierno el principio de que, en todos los casos, ... los interesados deberían ser juzgados en el más breve plazo posible por una autoridad judicial imparcial e independiente"; y se solicita al Gobierno el envío de informaciones sobre la situación actual de varias organizaciones sindicales (UNTMRA, AERU, AUTE, Federación de Trabajadores de OSE, SOIMA, SUANP, Sindicato Médico, Sindicato de Gas trónicos y Movimiento de Coordinación del Magisterio).

Por su parte, el gobierno uruguayo aceptó el envío de un representante del Director General de la OIT a fin de investigar la situación sindical en el Uruguay.

El informe aprobado por el Consejo de Administración de la OIT tiene en cuenta las denuncias presentadas en diversas oportunidades por la Federación Sindical Mundial, la Confederación Mundial del Trabajo y varias otras organizaciones sindicales, así como también las respuestas de la dictadura a esas denuncias (comunicaciones de mayo, junio, octubre y noviembre de 1976). En junio de 1975 había viajado al Uruguay una primera misión de la OIT, que también estuvo a cargo de un representante del Director General. En noviembre del año pasado, al examinar su informe, el Consejo de Administración "lamentó que el Gobierno aún no haya adoptado medidas concretas para normalizar la situación sindical", "reiteró el principio de que las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa" y solicitó al Gobierno "el envío de sus observaciones detalladas sobre la ocupación y el allanamiento de los locales sindicales" (ver "Informaciones", Nº 40).

Conclusiones y recomendaciones. Se transcriben a continuación los párrafos del informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT relativos a sus conclusiones y recomendaciones, que acaban de ser aprobadas por el Consejo de Administración.

Conclusiones

"43. El Comité recuerda que en junio de 1975 el Ministro de Trabajo había declarado al representante del Director General que el Gobierno esperaba poder presentar una nueva legislación sindical hacia finales de dicho año o principios de 1976. En su reunión de noviembre de 1975, el Consejo de Administración, por recomendación del Comité, había señalado al Gobierno la importancia que concede a las normas del Convenio Nº 87, teniendo en cuenta en particular las observaciones formuladas por el Comité en un caso anterior y por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones respecto del decreto Nº 622, que reglamenta las actividades sindicales. El Gobierno había declarado ulteriormente que las principales causas que motivaron las disposiciones extraordinarias adoptadas seguían existiendo y, en febrero de 1976, el Comité había subrayado la importancia de separar, por un lado, las cuestiones relativas al ejercicio de los derechos sindicales y, por otro, las que conciernen a la realización, por parte de ciertos sindicalistas, de actividades de tipo político (actualmente prohibidas) ajenas al campo sindical o que exceden de las actividades sindicales normales. Había lamentado que el Gobierno aún no hubiera tomado medidas concretas para normalizar la situación sindical, prolongando así un estado de cosas en el cual la legislación y las prácticas restrictivas limitan seriamente las actividades propias de toda organización profesional, en violación de los principios básicos del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (Nº 87), ratificado por el Uruguay.

44. En sus últimas comunicaciones, el Gobierno reitera los motivos que habían dado lugar a la adopción de las medidas excepcionales, señalando que la vigencia de éstas habían impedido hasta el presente la normalización definitiva de las organizaciones sindicales. Sin embargo, estima el Gobierno que ahora ha llegado el momento de comenzar el estudio de la legislación que dará pleno efecto a los Convenios Nos. 87 y 98.

45. El Comité lamenta que a pesar del tiempo transcurrido, el Gobierno aún no haya procedido a elaborar una legislación sindical conforme a los convenios que ha ratificado. Parece desprenderse de las informaciones suministradas que sólo ahora se iniciarán las tareas respectivas y que los nuevos textos se adoptarán en forma paulatina, a medida que se normalice la situación.

46. Por otra parte, en lo que se refiere a la detención de sindicalistas y trabajadores, resulta que muchos de ellos han sido nuevamente liberados, pero es bastante mayor el número de los requeridos, detenidos o procesados. El Comité observa que el Gobierno ha dado ciertas precisiones con respecto a los hechos que motivaron la detención de diversas personas, y que serían de naturaleza política. Estas precisiones faltan en cuanto a los otros detenidos. El Comité también observa que a pesar del tiempo transcurrido en muchos casos, todavía no se ha dictado sentencia en relación con los sindicalistas que siguen detenidos.

47. Según los querellantes, algunas de las personas mencionadas en las quejas han muerto durante la detención como consecuencia

de actos de tortura. El Gobierno niega estos alegatos y suministra ciertas precisiones sobre las causas de los fallecimientos (accidente, suicidio o muerte natural).

48. Por otro lado, ninguna precisión es aportada por el Gobierno en lo que se refiere a los alegatos sobre allanamiento, ocupación o cierre de locales sindicales, remitiéndose únicamente a sus observaciones anteriores relativas a las actividades de tipo político que habrían motivado tales medidas.

49. El Comité estima que ya es urgente que el Gobierno proceda a la normalización de la situación sindical, y a este fin es de la mayor importancia que ponga en vigor una nueva legislación en la materia. El Comité ya ha analizado la legislación actual, así como diversos aspectos de la situación de hecho, en su 153er. informe, basándose para ello en las informaciones comunicadas por el representante del Director General después de su visita de contactos directos. En dicha oportunidad, el Comité señaló la existencia de normas y prácticas restrictivas que afectan las actividades sindicales, y se refirió a la situación irregular en la que se encuentran las organizaciones sindicales, que no pueden obtener una existencia legal y ven así limitadas su gestión interna y sus actividades específicas en defensa de los intereses de los trabajadores. La legislación sindical ha sido examinada también detalladamente por el Comité en el caso Nº 771, relativo al Uruguay, y por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, la que formuló sus comentarios dirigidos al Gobierno.

50. El Comité toma nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno y en particular de su declaración según la cual ha llegado el momento de comenzar a preparar una nueva legislación, y que informará a la Oficina sobre las diversas fórmulas previstas para que pueda comprobarse su adecuación a los Convenios Nos. 87 y 98. El Comité considera que el Gobierno debería preparar cuanto antes un nuevo texto legal y estima conveniente que la Oficina pueda transmitirle comentarios sobre la conformidad de este texto con los mencionados convenios. En todo caso, la legislación debería adoptarse sin demora, con el objeto de que los sindicatos puedan constituirse y funcionar normalmente.

51. En lo que concierne a la detención de sindicalistas, el Comité estima necesario disponer de informaciones precisas sobre los hechos imputados a los detenidos, así como del texto de las sentencias que eventualmente se dicten a su respecto.

52. El Comité también desearía obtener informaciones sobre la situación de las siguientes organizaciones sindicales, cuyos locales, de acuerdo con los querellantes, habrían sido allanados, ocupados o cerrados: Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), Agrupación de las Usinas y Teléfonos del Estado (AUTE), Asociación de Trabajadores de Obras Sanitarias del Estado, Sindicato Obrero de la Industria de la Madera y Anexos, Sindicato Unico de la Administración Nacional de Puertos (SUANP), Sindicato Médico, Sindicato de Gastronómicos y Movimiento de Coordinación del Magisterio.

53. Según sean las informaciones que el Gobierno suministre, en particular, sobre estas cuestiones, el Comité formulará sus recomendaciones en lo que respecta al procedimiento a seguir en relación con la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución (de la OIT).

Recomendaciones

54. En estas circunstancias, el Comité recomienda al Consejo de Administración:

- a) que exprese su preocupación ante la falta de progreso en la situación sindical;
- b) que llame la atención del Gobierno sobre la necesidad de permitir cuanto antes la normalización de esta situación y, a este fin, de adoptar una legislación sindical que esté en conformidad con los convenios ratificados por Uruguay y que tenga en cuenta los comentarios formulados por los organismos de control de la OIT, y que solicite del mismo el envío de informaciones detalladas sobre las medidas tomadas a este efecto.
- c) que tome nota de la liberación de sindicalistas y de las precisiones dadas por el Gobierno con respecto a los motivos de detención de algunos de los detenidos, y que inste al Gobierno a que envíe informaciones más detalladas sobre los hechos específicos imputados a los numerosos otros sindicalistas aún detenidos, así como el texto de las sentencias que eventualmente se dicten, con sus considerandos;
- d) que señale nuevamente a la atención del Gobierno el principio de que en todos los casos, inclusive cuando se acusa a sindicalistas de delitos de carácter político o de derecho común que el Gobierno considere sin relación alguna con sus funciones o actividades sindicales, los interesados deberían ser juzgados en el más breve plazo posible por una autoridad judicial imparcial e independiente;
- e) que solicite del Gobierno el envío de informaciones sobre la situación actual de las organizaciones mencionadas en el párrafo 52;
- f) que pida al Gobierno que envíe todas estas informaciones a más tardar para el 31 de enero de 1977, quedando entendido que el Comité presentará un nuevo informe al Consejo de Administración en su reunión de febrero-marzo de 1977, y que dé su consentimiento para que un representante del Director General proceda a un examen en el país de la evolución de la situación en el campo sindical."

El informe del Comité de Libertad Sindical tiene un anexo en el que se incluye la información suministrada por la dictadura sobre la situación de alrededor de 130 dirigentes sindicales y trabajadores detenidos, requeridos, liberados o fallecidos durante su detención. Acerca de la veracidad de la información oficial uruguaya, basta señalar que, por lo que respecta a los fallecidos se dice que Carlos Angel Argenta murió de muerte natural; Alvaro Balbi, de muerte natural; Oscar Bonifacio Olivera, por herida de bala por descuido de un custodia; y que Pedro Ricardo Lerena Martínez se suicidó.

2. UNIVERSIDAD: CESA UN INTERVENTOR,
PERO NO LA INTERVENCION.

El 6 de noviembre, Aparicio Méndez aceptó la renuncia del Rector Interventor de la Universidad, Arq. Gustavo Nicolich, y designó para sustituirlo al Decano Interventor de Ciencias Económicas, Cdor. Jorge Anselmi.

El Arq. Nicolich estuvo al frente de la intervención desde el 4 de febrero de 1975, fecha en que sustituyó al Sr. Edmundo Narancio, que había ocupado simultáneamente los cargos de Ministro de Educación y Cultura y de Rector Interventor.

Al tenerse las primeras noticias sobre la renuncia del Arq. Nicolich, la prensa informó que la misma se debía, simplemente, a algunas discrepancias de carácter administrativo. Sin embargo, posteriormente el propio Nicolich declaró: "Pienso que he cumplido un ciclo que no puede prolongarse más; la intervención lleva ya tres años y a mi juicio debe pasarse a una segunda etapa".

3. CESA LA INTERVENCION,
PERO NO LOS INTERVENTORES.

El Poder Ejecutivo anunció que "se dejaron sin efecto las intervenciones y las designaciones en carácter de directores interventores en el Banco de la República, el Banco Hipotecario y ANCAP". Se transcribe a continuación la nómina de "ex interventores" y la de "nuevos directores" de los tres organismos.

	<u>Ex interventores</u>	<u>Nuevos directores</u>
Banco República	Gral. Abdón Raymúndez Cdor. Moisés Cohen Cdor. Raúl Ferraro	Gral. Abdón Raymúndez Cdor. Moisés Cohen Cdor. Raúl Ferraro
Banco Hipotecario	Dr. Julio César Luongo Cnel. Walter Altamirano Dr. Ernesto Llovet	Dr. Julio César Luongo Cnel. Walter Altamirano Dr. Ernesto Llovet
ANCAP	Brig. Jorge A. Borad Cnel. Agustín I. Andrés Cap. de Navío Nelson Barussio	Brig. Jorge A. Borad Cnel. Agustín I. Andrés Cap. de Navío Nelson Barussio

4. RATAS. De acuerdo con informaciones proporcionadas a la prensa por el Departamento de Higiene de la Intendencia Municipal, en Montevideo hay 5 ratas por cada 2 habitantes.

5. COMPRA DE HELICOPTEROS A LOS EEUU. La Fuerza Aérea Uruguaya adquirió seis helicópteros UH1B a los Estados Unidos. No trascendió el precio de la operación, que es la primera que se concreta desde la supresión de la ayuda militar norteamericana.

6. DETIENEN A LUIS IGUINI. La Convención Nacional de Trabajadores denunció la detención de Luis Iguini, miembro de su Secretariado Ejecutivo y dirigente de COFE, por cuya vida se teme.

7. VADORA DA LINEA. En una conferencia de prensa realizada el martes 9, el Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Julio César Vadora, se refirió a distintos temas de la política nacional e internacional, reiterando conceptos y lineamientos ya manifestados en anteriores ocasiones.

Por lo que respecta a la situación institucional, afirmó que en 1981 habrá elecciones con un candidato único elegido por los partidos políticos (permitidos) cuyo funcionamiento se autorizará antes de ese año (no precisó cuándo). "Nunca el país debe dejar de tener un gobierno cívico-militar", dijo, y añadió que ese principio tendrá que incorporarse en la nueva Constitución. "La reforma constitucional prácticamente se está realizando a través de los Actos Institucionales", señaló más adelante. Y continuó: "Esos textos, que modifican la Constitución vigente, pasarán a integrar el texto constitucional futuro".

Sostuvo Vadora que en el Uruguay hay poco más de 1.800 presos políticos y que otros 1.400 han sido liberados. Evidentemente, redujo en forma considerable la primera de las cifras (aproximadamente a la tercera parte) y aumentó la segunda. No llama mucho la atención si se tiene en cuenta que al mencionar los lugares de reclusión de presos políticos se refirió exclusivamente a "los dos establecimientos de detención que posee el Estado para esos tipos de delitos, a la Cárcel de Mujeres y a Punta Carretas". Además de olvidarse de las Jefaturas de Policía y de todos los cuarteles del país, se habrá olvidado del Establecimiento de Libertad, del de Punta Rieles o del de Paso de los Toros?

El Tte.Gral.Vadora afirmó que el gobierno tiene a estudio una "reestructuración de la actividad sindical" y que "debemos llegar a tener sindicatos plenamente conscientes de su real poder, cuya incidencia en la política no se haga como poder constituido".

En cuanto a la situación de la prensa, sostuvo que no es posible el mantenimiento de una libertad de prensa absoluta y que es necesario mantener controles que restrinjan la información cuando ésta pueda perjudicar la seguridad del Estado.

Vadora manifestó la decisión de la dictadura de mantener la misma política internacional seguida hasta ahora, en especial con respecto a los Estados Unidos, y enfatizó: "son los Estados Unidos los que deberían cambiar su política con respecto al Uruguay". Señaló que la Cancillería "está tratando por todos los medios de hacer que todos los Embajadores tengan la suficiente información como para poder combatir la imagen deformada que se trata de transmitir a la opinión pública mundial".

Finalmente, en materia económica, pronosticó que "1977 será un año óptimo para el Uruguay" y anunció que se están estudiando soluciones que permitan superar el problema del deterioro del salario real. Aunque no entró en detalles, adelantó que "en materia de distribución de riquezas, es necesario primero generarlas y en eso aún no se ha alcanzado el nivel requerido".

8. RECTIFICACION. Sara Lerena no se encuentra entre los uruguayos desaparecidos en Buenos Aires en las últimas semanas, como se consignó por error en el Nº 58 de "Informaciones".

9. PROSCRIPTOS: OTROS TRES "PERDONADOS"; ASEGURAN RESERVA A LOS "IMPERDONABLES". La Comisión Interpretativa creada por el Acta Institucional

Nº 4 con el cometido de excluir de la nómina de ciudadanos proscriptos a las personas que merezcan, a los ojos de la dictadura, ser exceptuadas de la prohibición de ejercer actividades políticas, decidió "absolver" al Dr. Santiago de Brum Carbajal (ex Senador y ex Ministro del Interior); al Dr. Alejandro Rovira (ex Ministro del Interior, actual Embajador en Israel) y al Esc. José Francisco Jaso Anchorena (ex legislador).

La Comisión Interpretativa está integrada por el Ministro del Interior, Gral. Hugo Linares Brum, el Consejero de Estado Enrique Viana Reyes y el Jefe del ESMACO, Contralmirante Francisco Sanguro.

Por otra parte, dicha Comisión anunció que "no habrán de publicarse las resoluciones denegatorias de las peticiones formuladas a la Comisión". El Acta Institucional Nº 4 faculta a la Comisión para actuar "de oficio" (es decir, por su propia iniciativa) o bien a petición de los interesados. Las 10 excepciones aprobadas hasta ahora han sido resueltas "de oficio". En medios periodísticos se estima que el anuncio de que no se dará publicidad a los rechazos de solicitudes tiene por objeto estimular a los políticos comprendidos en la prohibición a que formulen solicitudes, ya que ha trascendido que no son muchas las presentadas por el momento debido a que una buena cantidad de los afectados por la medida no reconocen autoridad moral a los miembros de la Comisión para pronunciarse sobre sus antecedentes.

En otro orden de cosas, se supo que el Senador Carlos Julio Pereyra, ex candidato a la Vicepresidencia de la República por el Partido Nacional, renunció a su cargo en un instituto de enseñanza en protesta por su proscripción política. "Soy contrario al ejercicio sistemático de la violencia y al odio ciego al enemigo ideológico, porque todo ello conduce a la arbitrariedad y a la injusticia", afirmó en una carta que circuló en Montevideo.

10. NUEVAS LIMITACIONES A LOS URUGUAYOS EN LA ARGENTINA. Desde hace varios meses, los uruguayos que ingresan a la Argentina como turistas sólo están autorizados a permanecer en ese país durante 7 días, en lugar de 3 meses.

Ahora, mediante avisos publicados en Montevideo, el Consulado argentino hizo saber que: "1) todos los trámites relacionados con radicaciones, ya sean temporarias o definitivas, deberán ser efectuados ante los Consulados de la República Argentina; 2) dichos trámites no pueden realizarse ante las Oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones sitas en la República Argentina; 3) existe expresa prohibición de cambiar la calificación de las visas de ingreso al país; 4) aquellos que ingresen como 'turistas' no podrán cambiar su calificación a 'temporarios' ni 'permanentes'; 5) los estudiantes deberán consultar sobre las nuevas disposiciones vigentes en el Consulado de la República Argentina más próximo a su domicilio".

Estas disposiciones agravan la situación de los uruguayos que se ven obligados a abandonar su país por razones de persecución política y no disponen de pasaporte.

11. LAS FUERZAS CONJUNTAS MANTIENEN EN SECRETO LA IDENTIDAD DE 45 DETENIDOS; ENTRE ELLOS HABRÍA MUCHOS MAS APRESADOS EN BS.AS.

Los comunicados de las Fuerzas Conjuntas del 28 y 29 de octubre (ver "Informaciones", No 58) afirman que fueron detenidas 62 personas

pertenecientes a una nueva organización política (el "Partido por la Victoria del Pueblo", PVP), pero sólo identifican a 17 de los detenidos. No mencionan a los 45 restantes, entre los cuales cabe presumir que se encuentren muchos de los refugiados uruguayos desaparecidos en los últimos meses en la Argentina. En efecto, según las Fuerzas Conjuntas, todas las detenciones se practicaron en territorio uruguayo, pero en realidad 14 de las 17 personas nombradas en los comunicados fueron apresadas en Buenos Aires y trasladadas al Uruguay contra su voluntad. Se trata de: Sergio Ruben López Burgos, Sara Rita Méndez Lompodio, Asilu Sonia Maceiro Pérez, María Elba Rama Molla, Ana Inés Quadros Herrera, Gastón Zina Figueredo, Cecilia Irene Gayoso Jauregui, María Mónica Soliño Platero, Ariel Rogelio Soto Loureiro, Ana María Salvo Sánchez, Alicia Raquel Cadenas Ravela, Edelweiss Zahn Freire de Andrés, Víctor Hugo Lubián Peláez y Marta Petrides de Lubián. Para justificar ese traslado ilegal de la Argentina al Uruguay, las Fuerzas Conjuntas atribuyen al PVP el método de denunciar la desaparición en Buenos Aires de los militantes que pasaban a la clandestinidad.

Hay testigos que presenciaron la detención en Buenos Aires de muchas de esas 14 personas. Pero además la propia lectura de los comunicados oficiales demuestra su falsedad. Por ejemplo, resulta incomprensible cómo una organización de izquierda podría ser responsable --como sostienen las Fuerzas Conjuntas-- de atentados antisemitas perpetrados en la capital argentina, que fueron públicamente alentados primero, y aplaudidos después, por órganos de prensa declaradamente pro nazis. También se imputa al PVP la inversión de fabulosas sumas de dinero en la publicación de artículos en la revista norteamericana "Time", el diario "New York Times", "La Vanguardia" (de Barcelona), etc. ¿Es posible que los militares uruguayos crean que esos diarios y revistas se venden al mejor postor? ¿Se pensarán, por otra parte, que son sólo esos órganos de prensa los que en todo el mundo han denunciado a la dictadura uruguaya?

Muchos otros pasajes de los comunicados llaman poderosamente la atención de cualquier lector. Por ejemplo, el hecho de que militantes clandestinos residan en hoteles, o de que se oculte el nombre de los propietarios de un chalet en el cual --según las Fuerzas Conjuntas-- habrían sido apresados varios de los detenidos. ¿No será que en realidad ese chalet pertenece a los propios militares?

Pero más allá de las afirmaciones inverosímiles de las Fuerzas Conjuntas, de sus contradicciones y de las dudas que quedan planteadas, conviene examinar algunos antecedentes. En primer lugar, debe señalarse que ha habido muchos otros casos de militantes uruguayos trasladados ilegalmente de la Argentina al Uruguay; algunas veces incluso para matarlos (Floreal García, Mirtha Hernández de García, Héctor Brum, Graciela Estefanell y María de los Angeles Corbo, detenidos en Buenos Aires el 5 de no-

viembre de 1974, cuyos cadáveres aparecieron en el Uruguay pocos días después de la muerte de Trótski). Asimismo, es conveniente recordar la respuesta que recibió de un abogado estrechamente vinculado a las altas jerarquías de la Policía Federal argentina el padre de uno de los uruguayos desaparecidos en Buenos Aires en el mes de julio pasado: "Los servicios de seguridad uruguayos son los responsables directos, con el apoyo concedido por las autoridades argentinas, de lo que ocurre con los uruguayos residentes en la Argentina, por lo menos desde 1975. En estos momentos sería imposible negociar la libertad o la vida de su hijo, pues está en marcha un llamado Plan Mercurio destinado a terminar con todos los izquierdistas uruguayos en ambos países" (ver "Informaciones", No 53).

Otro antecedente que vale la pena tener presente es una trampa parecida, tendida por las Fuerzas Conjuntas con el propósito de desmentir otra denuncia internacional. El 22 de mayo pasado, realizaron una conferencia de prensa en la que exhibieron a cuatro presos políticos (Raúl Cariboni, Juan Carlos Mechoso, Héctor Romero y Alfredo Pareja), cuya muerte --afirmaron los militares-- había sido denunciada en el exterior. Pero lo que se había denunciado con respecto a ellos era que habían sido retirados del Penal de Libertad y trasladados con rumbo desconocido, señalándose que en esos casos los presos políticos son sometidos a nuevos interrogatorios y torturas. ¿Se puede pensar que los militares se hayan confundido en cuanto al contenido de la denuncia? No cabe duda de que lo que pretendieron, también en esa oportunidad, fue realizar una maniobra para desacreditar a los organismos denunciados.

Los otros tres detenidos mencionados en los comunicados oficiales --Ricardo Gil Iribarne, Elida Vázquez de Anzalone y Luis Alberto Ferreira da Silva-- fueron aprehendidos en el Puerto de Colonia en el mes de marzo. Las Fuerzas Conjuntas reconocen, pues, que han estado más de siete meses incomunicados y que durante ese período no se ha dado información alguna sobre su situación. ¿Piensan proceder de la misma manera con los otros 45 detenidos que admiten tener en su poder y cuyos nombres no han revelado?

12. AUTORIDADES DE LA ENSEÑANZA: LA MITAD SON MILITARES. Resulta sumamente ilustrativa del grado de militarización alcanzado por la dictadura, la nómina de participantes en una reunión que tuvo lugar entre los más altos jerarcas en materia de educación. En ese dominio, tan alejado del quehacer castrense, existe igual número de uniformados que de sin uniforme. La reunión mencionada se celebró el 9 de noviembre, tuvo por objeto la preparación de documentos sobre la situación educacional que serán examinados en el próximo conclave de la dictadura (que se realizará en el Parque Hotel, del 6 al 10 de diciembre), y a ella asistieron siete civiles y siete militares: Dr. Daniel Darracq (Ministro de Educación y Cultura); Dr. Héctor Artucio (Subsecretario de Educación y Cultura); Ing. Daniel Ferreira (Rector del CONAE); Cdor. Jorge Anselmi (Rector Interventor de la Universidad); Dr. Pedro Freire (Rector Interventor de Primaria); Prof. Carlos Pascual (Director Interventor

de Secundaria); Ing. Enrique Kliche (Director General de la UTU); Cnel. Gabriel W. Barba (Director General de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura); Cnel. Pedro Fernández Bordes (Subdirector Interventor de Primaria); Cnel. Juan Carlos Reissig (Subdirector Interventor de Secundaria); Capitán de Navío Elbio Amorín (Subdirector de la UTU); Cnel. Yamandú Trinidad (Presidente de la Comisión Nacional de Educación Física); Cnel. Guillermo Lopeteguy (Coordinador Ejecutivo de la Comisión Asesora de Planeamiento Educativo); y Cnel. Gustavo Ferrand (Vicepresidente del SODRE).

13. DEFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL. El 5 de noviembre el Banco Central informó que, al 20 de octubre, la balanza comercial registraba un déficit de 97 mil dólares, por haberse realizado importaciones por un monto de 432 millones 412 mil dólares y exportaciones por 432 millones 315 mil dólares.

Estas nuevas cifras demuestran, una vez más, que el Banco Central, a fin de mejorar la imagen económica del país, elige las fechas que le son más propicias para la publicación de los boletines oficiales. Por ejemplo, para las informaciones anteriores había tomado la del 10 de setiembre, que comprendía los datos de importantes ventas concretadas en los días previos, con el objeto de dejar registrado un superávit en la balanza comercial que, en realidad, era totalmente artificial y excepcional.

14. CIGARRILLOS: 9 % DE AUMENTO. "Montepaz S.A." dispuso un aumento del precio de los cigarrillos que distribuye del orden del 9 % y se estima que las demás fábricas aprobarán subas similares. Los "La Paz Suaves" pasaron de N\$ 0.96 a N\$ 1,05; los "La Paz Filtro", de N\$ 1,15 a N\$ 1,26; y los "Oxhibitué", de N\$ 1,26 a N\$ 1,36.

15. ESPAÑA SIGUE COMPRANDO CARNE. Se concretó una nueva operación de venta de carne a España por un total de 6 mil toneladas y quedó pendiente la colocación de otras 2 mil toneladas. Si se tiene en cuenta que en los meses de abril y mayo había adquirido 12 mil toneladas, España se ha convertido en uno de los principales consumidores de carne uruguaya. La última operación consistió en un acuerdo en virtud del cual Uruguay comprará catorce grúas livianas que se utilizarán en el Puerto de Montevideo y cuyo costo es de unos 7 millones de dólares.

16. ALEMANIA FEDERAL: PRESTAMO POR DOS MILLONES Y MEDIO DE DOLARES. El gobierno de la República Federal de Alemania con cedió al Uruguay un préstamo por dos millones y medio de dólares con destino a la industria alimenticia, la financiación de la participación de Uruguay en varias ferias europeas de alimentos, y la instalación de una planta piloto para el procesamiento de la producción horti-frutícola.

17. 17^a Y 18^a DEVALUACIONES DE 1976. El 25 de octubre, el Banco Central dispuso la segunda devaluación de ese mes —y 17^a del año— al fijar la cotización del dólar comercial en N\$ 3,78 en la compra y N\$ 3,84 en la venta. Esa medida supone una depreciación del 2,64 % del peso uruguayo.

El 12 de noviembre sobrevino la 18^a devaluación: el dólar comercial se fijó en N\$ 3,83 y N\$ 3,87 (en la compra y en la venta respectivamente. Esta medida es del orden del 1,24 %.

Desde el 1º de enero de 1976, el peso uruguayo ha perdido alrededor del 35 % de su valor. En esa fecha, el dólar comercial se cotizaba a N\$ 2,70 y N\$ 2,73.

18. CARNE: SIGUE SIN HABER, PERO SUBE. La población de Montevideo y de Canelones comprueba diariamente la falsedad del reciente comunicado del COSENA en el que se sostenía que los uruguayos comen demasiada carne, y de las cifras proporcionadas por el Ministro de Agricultura y Pesca, Ing. Julio Aznárez, según las cuales en 1976 se registrará el récord de consumo interno de carne vacuna (ver "Informaciones", Nº 58). En efecto, en lo que va del segundo semestre de este año, las carnicerías de los mencionados departamentos no han tenido ni un kilo de carne. En reiteradas oportunidades las autoridades anunciaron que en pocos días se solucionaría esa situación, pero hasta ahora no se ha registrado ninguna novedad. A veces se ha distribuido carne ovina, pero en general no ha sido suficiente para satisfacer ni siquiera el 50 % de la demanda.

De todos modos, a partir del lunes 8 comenzaron a regir los nuevos precios de venta al público de la carne aprobados por el COSENA. El aumento es del orden del 5 %. Asimismo, el precio de las haciendas vacunas fue incrementado en un 25 %. Se dispuso también que el flete correspondiente a las haciendas remitidas a los frigoríficos quedase a cargo de los productores.

La ausencia de carne para el consumo interno ha provocado un auge del mercado negro del producto. Informaciones periodísticas dan cuenta de que en Montevideo se está vendiendo el kilo de pulpa a N\$ 8, siendo el precio oficial de N\$ 3,64. Esa carne viene del interior del país en condiciones de higiene que no tienen ningún control.

9. NUEVA SUBA DE LAS TARIFAS DE UTE: 21 % EN 6 MESES.

De acuerdo con el sistema bimensual de aumentos de tarifas aprobado hace algunos meses por UTE,

a partir del 1º de noviembre el precio del kwh para casas de familia quedó fijado en N\$ 0.094, lo que representa un aumento del 4 %. A este incremento deben sumarse los que comenzaron a regir el 1º de julio (10 %) y el 1º de setiembre (5 %), así como también la creación de un cargo fijo mensual (N\$ 0,57).

Rigen aumentos similares para otros tipos de consumos (profesionales, comercios, etc.) y de servicios (la tarifa de teléfonos para las casas de familia, por ejemplo, fue fijada en N\$ 13,80). Todos estos nuevos precios regirán sólo hasta el 31 de diciembre, ya que serán aumentados a partir del 1º de enero, y luego nuevamente a partir del 1º de marzo y así sucesivamente cada dos meses.

20. DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE. De conformidad con la Constitución de la República, el último domingo de noviembre de 1976 debían celebrarse las elecciones nacionales. Pero el Acta Institucional Nº 1, de fecha 12 de junio de 1976, dispuso: "Suspéndese, hasta nuevo pronunciamiento, la convocatoria a elecciones generales prevista en la Constitución, así como los actos y operaciones electorales que son de su consecuencia".

21. PERSONALIDADES LATINOAMERICANAS OPINAN SOBRE EL CESE DE LA AYUDA MILITAR NORTEAMERICANA. El boletín Nº 4 del Comité de Solidaridad con el Pueblo Uruguayo (COSUR), que se edita en México, publica algunas declaraciones formuladas por varios dirigentes políticos latinoamericanos sobre la suspensión de la ayuda militar al Uruguay resuelta por los Estados Unidos.

Juan Bosch (ex Presidente de la República Dominicana): "Son medidas de carácter político con vistas a las elecciones norteamericanas de noviembre. El Partido Demócrata tiene que ganar algunas simpatías entre las masas de su país y se presenta ahora como defensor de los derechos humanos en el Uruguay, Argentina y Chile. Por cierto, es una excepción de último momento, porque desde hace años se vienen atropellando los derechos humanos en esos países del Cono Sur y el Partido Demócrata mantuvo silencio. Si los demócratas pierden las elecciones de noviembre, estas medidas se olvidarán completamente; si triunfan, es posible—digo otra vez, es posible— que los propios demócratas se olviden de lo que ahora impulsan. Para mí, la lucha por la vigencia de los derechos humanos en América Latina tiene que ser tarea de los pueblos latinoamericanos. Sin duda, hay que recibir como una medida favorable todo lo que se haga en ese sentido en cualquier otro lado. Pero la lucha debe ser nuestra. No podemos confiar la solución de nuestros problemas a las resoluciones que tome el Senado o el Congreso norteamericano, sobre todo cuando esas resoluciones tienen un fin político interno".

Marcelo Quiroga Santa Cruz (ex Ministro de Bolivia): "Es un hecho importante. No obstante la limitación parcial que el sistema represivo uruguayo sufrirá como consecuencia de su exclusión del sistema de ayuda militar, la política global del Departamento de Estado y sus relaciones fundamentales con el gobierno uruguayo no variarán sustancialmente. El gobierno norteamericano se mantiene más fiel a los objetivos que tiene en común con la dictadura uruguayana que al espíritu retóricamente democrático que los acusadores de Ford quisieran ver extendido en el Cono Sur."

Pedro Vuskovic (ex Ministro de Chile): "Con toda la importancia que cabe atribuir a esta medida, a mí me parece que cumplirá una función positiva sólo en la medida en que dé paso a una comprensión profunda, por parte del pueblo norteamericano, de lo que está ocurriendo en varios países de América Latina. El pueblo norteamericano no puede seguir desconociendo la participación y responsabilidad que han tenido organismos de su gobierno en la extensión del fascismo en América Latina. La única perspectiva sería es que el pueblo norteamericano exija permanentemente acciones como ésta. Y esta resolución del Congreso norteamericano tendrá real efecto en la medida en que se aplique en los hechos. Porque ya hemos conocido condenas a las dictaduras del Cono Sur que después quedan en palabras."